

El principio del fin de la Junta de Supervisión Fiscal empieza por la AAA

En el gobierno de Puerto Rico creemos en la coordinación, en vez de la confrontación, con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que terminen su misión lo antes posible. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Administración del gobernador Pedro Pierluisi está convencida que los aciertos de ésta deben marcar el principio del fin de la JSF y que de inmediato, la Junta debe establecer claramente los pasos a seguir para declarar terminada su intervención en la AAA.

La Junta no puede esperar a que todos y cada uno de los temas en cada una de las instrumentalidades del gobierno estén resueltos, sino que debe ir soltando uno a uno. En el caso de la AAA, las transacciones de refinanciamiento de bonos que se completaron en diciembre de 2020 y esta semana, respectivamente, son una indicación concreta de que la Junta debe establecer un plan claro para terminar su intervención.

La AAA nunca se fue a la quiebra bajo el Título III de PROMESA ni utilizó el Título VI de PROMESA para reestructurar su deuda. La AAA logró negociar, sin la intervención de la Junta, una reprogramación de la deuda con las agencias federales Environmental Protection Agency y la división Rural Development - U.S. Department of Agriculture resultando en beneficios para todas las partes interesadas. Posterior a esta reprogramación, la AAA pudo reactivar el acceso a los programas de fondos federales bajo estas entidades, incluyendo volver a tomar prestado a tasas de interés preferenciales cerca del uno y dos por ciento.

Los mercados financieros han dado un respaldo inequívoco a la gestión de la AAA al viabilizar el refinanciamiento de sobre \$3,000 millones en transacciones ejecutadas en diciembre de 2020 y durante el mes en curso. Además, estos refinaciamientos se realizaron obteniendo el consentimiento de los bonistas participantes para dar prioridad a los gastos operacionales de la AAA sobre el pago de la deuda, lo cual será efectivo una vez las agencias federales consientan al cambio. Al momento, el pago de la deuda a los bonistas y las agencias federales tiene prioridad sobre el pago de gastos operacionales de la AAA. Una vez se logre el consentimiento de las agencias federales, la prioridad de pago cambiará priorizando los gastos operacionales sobre el pago de la deuda.

Otra señal contundente sobre los logros y avances de la AAA es el perfil de las instituciones financieras que compraron los bonos de refinanciamiento que incluyen las más grandes y sofisticadas del planeta. Algunas de estas entidades son BlackRock, Nuveen, Mackay Shields, Invesco, Vanguard, T. Rowe Price, entre otras. Por razones técnicas regulatorias, la AAA todavía no puede vender bonos directamente a inversionistas individuales.

Entre las asignaciones pendientes de la AAA está ponerse al día en la emisión de estados financieros auditados. La AAA publica reportes financieros interinos trimestrales y los estados financieros auditados están en proceso de emitirse para los años fiscales 2019 y 2020 en los próximos meses. La demora se debe principalmente a la emisión de ciertos reportes de los actuarios de la Administración de los Sistemas de Retiro. Dichos reportes actariales para el año fiscal 2019 se emitieron recientemente y se espera que los del año fiscal 2020 se emitan pronto, permitiendo que la AAA se ponga al día con la emisión de sus estados financieros auditados.

Esperamos cierta reticencia (o resistencia) de la Junta para soltar. El hecho es que los costos de operar la Junta y sus asesores los estamos pagando los puertorriqueños, a razón de sobre \$65 millones al año. En el caso de costos que incurre la Junta para supervisar las operaciones y las finanzas de la AAA, dichos costos son innecesarios.

Algunos miembros de la propia Junta entienden la urgencia de terminar su intervención con respecto a las acciones de los oficiales electos por el pueblo de Puerto Rico y sus respectivos equipos de trabajo. La AAA es el primer paso en esa dirección.

En las propias palabras de la Junta en el plan fiscal del Gobierno certificado el 23 de abril de 2021: "La Junta fue diseñada para tener una vida finita, objetivos y herramientas definidos, y autoridad para lograr dichos objetivos... la Junta busca completar su trabajo bajo PROMESA prontamente, para que los controles fiscales, sustentabilidad fiscal, y prosperidad económica y crecimiento vuelvan a Puerto Rico."

ES HORA DE PONER LA PALABRA Y LA INTENCIÓN EN ACCIÓN.



“En el caso de la AAA, las transacciones de refinanciamiento de bonos que se completaron en diciembre de 2020 y esta semana, son una indicación concreta de que la Junta debe establecer un plan claro para terminar su intervención”.

Omar J. Marrero
DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD DE ASESORÍA
FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

The Beginning of the End of the Oversight Board Begins with PRASA

In the government of Puerto Rico, we believe in coordination, rather than confrontation, with the Financial Oversight and Management Board (FOMB) in order to bring their mission to conclusion as soon as possible. In the case of the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority (PRASA), the Administration of Governor Pedro Pierluisi is convinced that PRASA's successes should mark the beginning of the end of the FOMB and that the Board should immediately and clearly establish the steps that need to be followed to put an end to its intervention in PRASA.

The Board should not be waiting for each and every one of the issues in each of the government's instrumentalities to be resolved, rather it should solve and let go one by one. In the case of PRASA, the bond financing transactions that were completed in December 2020 and this week, respectively, are a definite indication that the Board must establish a clear plan to end its intervention.

PRASA never filed for bankruptcy under Title III of PROMESA nor did it use Title VI of PROMESA to restructure its debt. PRASA managed to negotiate, without the intervention of the Board, a rescheduling of the debt with the U.S. Environmental Protection Agency and the Rural Development Division of the U.S. Department of Agriculture, which resulted in benefits for all stakeholders. Following this rescheduling, PRASA was able to reactivate access to federal fund programs under these entities, including borrowing again at preferential interest rates of approximately one and two percent.

The financial markets have unequivocally supported PRASA's endeavors by making it possible to refinance over \$3 billion through the transactions executed in December 2020 and this month. In addition, these refinancings were made obtaining the consent of the participating bondholders to prioritize PRASA's operating expenses over debt repayment, which will be effective once federal agencies consent to the change. At present, debt payments to bondholders and federal agencies take precedence over the payment of PRASA's operating expenses. Once the consent of federal agencies is obtained, the payment priority will change, and operational expenses will take precedence over debt repayment.

Another strong sign of PRASA's achievements and progress is the profile of the financial institutions that bought the refinancing bonds, which include the largest and most sophisticated financial institutions in the world. These entities are BlackRock, Nuveen, Mackay Shields, Invesco, Vanguard, T. Rowe Price, among others. For technical regulatory reasons, PRASA cannot yet sell bonds directly to individual investors. Catching up on the issuance of audited financial statements is among PRASA's pending assignments. PRASA releases quarterly interim financial reports, and the audited financial statements for fiscal years 2019 and 2020 are being prepared and will be issued in the coming months. The delay is mainly due to the issuance of certain reports from the actuaries of the Retirement Systems Administration. Such actuarial reports for fiscal year 2019 were issued recently and those for fiscal year 2020 are expected to be issued soon, which will allow PRASA to get caught up on the issuance of its audited financial statements.

We expect some reluctance (or resistance) to let go on the part of the Oversight Board. The fact is that the costs of operating the Oversight Board and its advisors are being paid by Puerto Ricans at a rate of over \$65 million a year. The costs incurred by the Board to oversee the operations and finances of PRASA are unnecessary.

Some members of the FOMB itself understand the urgency of ending the Oversight Board's intervention with respect to the actions of the officials elected by the people of Puerto Rico and their respective work teams. PRASA is the first step in that direction.

In the Oversight Board's own words in the Government's fiscal plan certified on April 23, 2021: "The Oversight Board was designed to have a finite life, defined objectives, and defined tools and authorities to achieve those objectives... The Oversight Board seeks to complete its work under PROMESA promptly, so that fiscal controls, fiscal sustainability, and economic prosperity and growth can return to Puerto Rico."

IT IS TIME TO PUT WORDS AND INTENTIONS INTO ACTION.